

19. ENTRE DESMOVILIZACIÓN Y REMOVILIZACIÓN. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTADO DE LAS LUCHAS POPULARES EN EL MARCO DE LOS LLAMADOS GOBIERNOS PROGRESISTAS LATINOAMERICANOS DURANTE 2011 MASSIMO MODONESI ¹⁶⁸

En este breve texto formularé una serie de reflexiones que pueden sonar perentorias, tanto por la forma sintética en que serán presentadas como por el grado de generalización que corresponde a todo intento de perspectiva de ámbito latinoamericano. Esto no significa que no consideremos indispensable y necesario conocer los detalles de los procesos de movilización y de protesta en sus diversas expresiones concretas. Para ello recomendamos la consulta de una fuente imprescindible -en la cual se apoyan las consideraciones vertidas en este escrito- constituida por las cronologías mensuales y los informes de coyuntura elaborados por los Comités de Seguimiento del Conflicto Social del OSAL-CLACSO (Observatorio Social de América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) que rastrean, caso por caso y país por país, las manifestaciones de la conflictualidad social a lo largo del año.¹⁶⁹

A grandes rasgos, podemos considerar el año 2011 como un año más de la transición entre las etapas que constituyen el más reciente proceso histórico latinoamericano, el cual podemos hacer remontar convencionalmente a mediados de los años 90 y que desde varios lados ha sido definido como un cambio de época. La noción de cambio de época alude a una periodización que establece como criterio de recorte histórico el agotamiento y la superación (relativa) del neoliberalismo como paradigma político-económico y como modelo dominante en la mayoría de los países latinoamericanos. Este quiebre suele ubicarse tanto en el momento de la irrupción de masivas movilizaciones populares de corte antineoliberal como en el surgimiento de un supuesto orden posneoliberal que se habría gestado con la instalación de una serie de

¹⁶⁸ Historiador y sociólogo, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la misma, Director de la revista OSAL del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Co-coordinador del Comité de Seguimiento del Conflicto Social en México del Observatorio Social de América Latina de CLACSO.

¹⁶⁹ Se recomienda en particular la lectura de los balances anuales de Ecuador (Mario Unda), Brasil (Roberto Leher y Alice Coutinho) y Argentina (Fabián Fernández) que serán publicados en mayo en el próximo número 31 de la revista OSAL, así como los informes cuatrimestrales sobre Uruguay elaborados por Rosana Moras.

gobiernos que fueron llamados genéricamente progresistas (Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, El Salvador y, más recientemente, Perú). Este mismo criterio de distinción entre un momento o dimensión movimentista y gubernamental o institucional aparece a la hora de delimitar las etapas al interior del proceso histórico reciente en su conjunto que, sin aferrarse a una cronología exacta sino remitiendo a secuencias con temporalidades, ritmos y formas específicas país por país, sin embargo, son susceptibles, a mi parecer, de ser ordenadas en términos generales y secuenciales de la siguiente manera:

1. El proceso se inició con un periodo marcado por la irrupción de movilizaciones de protesta y movimientos populares que quebraron el consenso neoliberal y provocaron una crisis de la hegemonía instaurada en un periodo iniciado a finales de los años 70 y principio de los años 80 según los casos.

2. Siguió, en una segunda etapa, una serie de cambios institucionales y gubernamentales derivados de una oleada de victorias electorales de candidatos, partidos y coaliciones progresistas.¹⁷⁰

3. Finalmente, un tercer momento, el que vivimos actualmente y en el que cabría incluir el año 2011, para el que propongo una caracterización basada en el reconocimiento, la distinción y la articulación de dos fenómenos o tendencias en el marco de la consolidación de las experiencias de los gobiernos progresistas –lo cual incluye la posibilidad de un posible agotamiento e inclusive involución–, lo que más nos interesa destacar en este escrito: a) un proceso de disminución de la conflictualidad social y de des-movilización; y b) una simultánea reactivación del conflicto y de re-movilización cuyas características hay que tratar de distinguir en sus formas incipientes.

En la primera etapa, como ha sido ampliamente estudiado y documentado (más en los distintos planos nacionales que a escala latinoamericana), después de años de repliegue defensivo y resistencial, aparecieron en la escena política de la gran mayoría de los países latinoamericanos actores y movimientos populares que rápidamente -no raras

¹⁷⁰ Cabe señalar que inclusive en la gran mayoría de los países que no llegaron a la segunda etapa, podemos reconocer fenómenos que remiten a la primera y reconocer el ascenso de movimientos antineoliberales de envergadura en México, Colombia, Chile y Honduras.

veces provocando crisis políticas y destituyendo gobernantes- asumieron un papel protagónico y marcaron una raya antagonista entre el campo de defensa del orden neoliberal y las luchas antineoliberales, repolitizando las prácticas de resistencia, modificando la correlación de fuerzas, posicionando demandas y ocupando lugares importantes en la disputa hegemónica en el contexto de la sociedad civil.

En la segunda fase, sobre la base de esta acumulación de experiencias y de fuerzas, las movilizaciones y los movimientos pasaron de acciones destituyentes, plasmadas en el ejercicio de acción de lucha y confrontación callejera, que les permitían ejercer un poder de veto, a proyectar su fuerza política en el juego institucional y particularmente electoral, impulsando y apoyando –con distintos niveles de vinculación orgánica- partidos y candidatos progresistas que se proclamaban más o menos radicalmente antineoliberales. Resultante de eso, se produjo una oleada de derrotas electorales para los partidarios del neoliberalismo y la correspondiente apertura de uno de los más grandes procesos de recambio relativo de los grupos dirigentes que ha visto la historia latinoamericana –probablemente sólo comparable con el giro antioligárquico los años 30. En la primera década del siglo se contaron tantos gobiernos de tinte progresista como no se veían desde los años 30 y 40.

En la tercera etapa, que estamos viviendo y en donde situamos el año 2011, el escenario se configura a partir de las dos tendencias generales enunciadas anteriormente. Del lado de los gobiernos llamados progresistas, salvo los casos de más reciente instalación (El Salvador y Perú), la mayoría ya cumplió -y, por lo tanto, tiene que ser evaluado en función de- un ciclo temporal relativamente extendido que contempló además de tres procesos constituyentes, varias reelecciones presidenciales y renovaciones de mandatos de gobernadores y legisladores, e inclusive, en el caso de Argentina y Brasil, el recambio del titular del Ejecutivo con el pasaje de mando de Néstor a Cristina y de Lula a Dilma, lo cual implicó ciertos ajustes en las dinámicas ligadas a los formas carismáticas de los liderazgos. Si por una parte, en términos generales, podemos asumir que se está viviendo una etapa de consolidación, al mismo tiempo esta formulación debe contemplar la hipótesis de un estancamiento y eventualmente de una involución. En efecto, esta caracterización es sostenida por una parte importante de los sectores críticos

que se fueron dislocando a la izquierda de los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula y Dilma en Brasil, Néstor y Cristina Fernández en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela.

Junto a esta perspectiva, está la de los que desde los primeros años vieron señales de cambio de ruta respecto de las promesas electorales o movimentistas de un radical giro posneoliberal o los que desde un principio cuestionaron el perfil ideológico y el alcance de proyectos de transformación nacional populares. En esta misma línea de debate hay que señalar que solo en el caso de los gobiernos de Cristina Fernández y de Chávez cabe la hipótesis de una radicalización en los últimos años, en clave nacional-popular en el primer caso y socialista en el segundo, vinculados no casualmente a la respuesta a una ofensiva de sabor restaurador: el golpe de Estado en Venezuela y el conflicto del campo en Argentina. No siendo el tema central de este escrito, dejo simplemente esbozado este problema de análisis y caracterización asumiendo que las apreciaciones y valoraciones sobre el momento y el estado de los gobiernos progresistas se vinculan estrechamente con la situación de los movimientos sociales y las formas, contenidos y alcances de los conflictos, el tema que aquí nos convoca.

En efecto, en este terreno, como ya he anunciado anteriormente, el problema interpretativo puede plantearse a partir de una hipótesis que se desdobra de la siguiente manera:

A. La presencia y las acciones de los llamados gobiernos progresistas en América Latina propician/promueven una relativa desmovilización y despolitización de los ciudadanos y las organizaciones sociales.

B. Sin embargo, se produce una contratendencia a la removilización y repolitización en contra y al margen de las iniciativas y las políticas de estos gobiernos.

Parece obvio que en la ponderación de ambas tendencias y en el señalamiento del peso y el papel de un elemento sobredeterminante se juega la capacidad de dar cuenta del estado general de los movimientos sociales país por país y en clave latinoamericana.

La primera parte de la hipótesis (A) es, a estas alturas, bastante aceptada o, si se quiere, de sentido común. Si en los primeros años, cuando las derechas buscaron el camino del conflicto social e institucional para

desestabilizar a los gobiernos antineoliberales, los índices de conflictualidad se mantuvieron relativamente altos pero, desde que esta ofensiva fue detenida y las oposiciones conservadoras o neoliberales volvieron a jugar sus fichas principalmente a nivel electoral -esperando que llegue el momento de la revancha-, la disminución cuantitativa de la conflictualidad social ha sido evidente y así lo registran los analistas y puede constatarse en diversos ejercicios de recopilación cuantitativa. En cuanto a las causas, se suelen enlistar en orden variable algunas de ellas como los efectos típicos del carácter delegativo propio del ejercicio del voto que desahogó tensiones y demandas que catalizaban las organizaciones y los movimientos sociales en los años anteriores; la cooptación o el voluntario ingreso de dirigentes y militantes de movimientos populares a las instituciones estatales en vista de traducir las demandas en políticas públicas; y la presión y el manejo clientelar de los actores gubernamentales y eventualmente la represión selectiva, entre otras.

En síntesis, la hora de los llamados gobiernos progresistas fue, más allá de la evaluación de los saldos en términos de políticas públicas y de un futuro balance histórico, también la hora de la desmovilización relativa, de la fallida oportunidad de ensayar una democracia participativa basada en la movilización social y, en parte, de una tendencia a la despolitización y el repliegue económico-corporativo de gran parte de las organizaciones y los movimientos que habían protagonizado las etapas anteriores.

Al mismo tiempo y por otra parte (hipótesis B), en los años más recientes es válido y necesario interrogarse sobre si se ha llegado al punto más bajo en esta tendencia o si ha surgido una contratendencia a la re-movilización y la re-politización a contrapelo de las políticas emprendidas por los llamados gobiernos progresistas.

En 2011, hay que registrar un conjunto de conflictos que habrá que sopesar para seguir reflexionando en la dirección de esta hipótesis. A nivel esquemático, a partir del seguimiento del conflicto que realizaron los comités del Observatorio Social de América Latina de CLACSO, destacan algunas líneas de conflicto recurrentes y otras emergentes.

Una línea de conflicto y de movilización social que se mantuvo presente, e inclusive se acentuó, en 2011 gira en torno a las *reivindicaciones laborales* protagonizadas por sectores de trabajadores sindicalizados que, como es

notorio, no son mayoritarios en el mundo del trabajo latinoamericano pero cuentan con tradiciones, organizaciones y una colocación estratégica que los hace tener un peso relevante y potencialmente determinante en los equilibrios socio-políticos. Aun cuando los gobiernos progresistas, apoyados por las principales centrales sindicales, más o menos ligadas a los partidos y los grupos gobernantes, aprovechando una coyuntura económica favorable, tendieron -con intensidades variables- a promover aumentos salariales en el sector público y propiciar con ello una tendencia similar en el sector privado, es notable cómo en 2011 se registraron señales de que los trabajadores organizados están adquiriendo más soltura combativa a la hora de condimentar las negociaciones laborales con presiones que no desdeñan el uso de la movilización y eventualmente la huelga y en algunos casos resultan en algún desgajamiento que refuerza el campo de los sindicatos autónomos. Ejemplo de dinámicas problemáticas internas a las coaliciones progresistas pudieron observarse en la CGT argentina, la CUT brasileña o el PIT-CNT en el Uruguay. A esta línea interna a las alianzas de gobierno hay que agregar aquellos conflictos que involucraron a actores sindicales y organizaciones de trabajadores independientes, como por ejemplo la COB en Bolivia y el sindicalismo magisterial en Ecuador.

Estos procesos, lejos de marcar un punto de ruptura definitivo e irreversible, ya que sigue siendo determinante el peso burocrático de los grandes aparatos y las dificultades en la articulación de las distintas experiencias de sindicalismo clasista (véase el fracaso de la unificación entre CONLUTAS e Intersindical en Brasil), no deja de dar cuenta de las tensiones que se viven en el campo popular frente a las contradicciones y los límites que van aflorando en el ejercicio de gobierno de los partidos y coaliciones progresistas. La pregunta que sigue abierta, porque la observación de los fenómenos ocurridos en 2011 no permite afirmaciones concluyentes, es si se trata de una dinámica fisiológica propia de la diversidad existente al interior del mundo de los trabajadores organizados, de procesos ligados a los ajustes internos a las coaliciones que sostienen a los gobiernos o de una tendencia a la ruptura y la conquista de mayor autonomía que pueda acumularse y proyectarse hacia un repunte sostenido de la movilización, de la politización y – eventualmente- una radicalización de los trabajadores asalariados.

Al margen de este ámbito clásico y, si se quiere, convencional del conflicto, hay que señalar que el *locus* emergente por excelencia de la generación de conflictos y movilizaciones en América Latina, remite a la *problemática socio-ambiental*, al surgimiento en toda la región de una serie de respuestas comunitarias (campesinas, indígenas y/o populares según la composición local) a las iniciativas de despojo territorial y destrucción ambiental impulsadas -con la complicidad de los gobiernos progresistas- por empresas mineras transnacionales, por el llamado agronegocio ligado a la producción de transgénicos y de agrocombustibles y por las grandes obras públicas (hidroeléctricas) que los mismos gobiernos licitan a favor de empresas constructoras nacionales y transnacionales.

Este aspecto sobresaliente de la conflictualidad latinoamericana en 2011 merecería un tratamiento más en profundidad que visualice puntualmente la cartografía de la difusión en el mapa de estas iniciativas del gran capital transnacional que se configuran como un asedio y un nuevo plan de saqueo del territorio latinoamericano. A este mapa corresponde fielmente la distribución de nuevas experiencias de resistencia. Es indudable el aumento exponencial y la difusión regional de los conflictos socio-ambientales –y esto se traduce en un creciente número de analistas e investigadores que le dan seguimiento- y de las experiencias de los movimientos comunitarios de protesta (que suman derrotas y victorias y se han convertido en un nuevo polo de subjetivación política y de conformación de prácticas y experiencias militantes). Estas luchas y estos movimientos han captado en forma creciente la atención y se han convertido en el gran acontecimiento conflictual del año 2011 -aun cuando podemos rastrear su emergencia en años anteriores, en particular en algunos países como Argentina. Al mismo tiempo, estas experiencias emergentes no destacan solo por su novedad –lo cual implica un saldo positivo en relación con la conflictualidad registrada en años anteriores- y su crecimiento cuantitativo sino porque ocupan un lugar estratégico en la lucha contra el capital. Para poner un ejemplo, hasta en Brasil los analistas señalan la centralidad de las luchas de los pueblos indígenas en la defensa de las reservas naturales amazónicas de cara a los proyectos de saqueo impulsados a la sombra de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA).

Así que la dimensión eco-territorial está convirtiéndose en el foco de alerta en torno al cual se movilizan las organizaciones campesinas e indígenas, lo cual expresa una perspectiva defensiva que, al mismo tiempo, revela la ausencia en la agenda política de la temática clásica de la reforma agraria que, salvo el caso venezolano, no fue objeto de ninguna iniciativa por parte de los gobiernos progresistas sino que, por el contrario, se asistió a un retorno a la concentración de la tierra en pocas manos a la sombra de la necesidades extensivas del agronegocio.

Finalmente, merecen una mención, para completar este bosquejo latinoamericano, dos ejes que no casualmente tuvieron su mayor expresión en los países que siguen gobernados por la derecha: los movimientos estudiantiles en Chile¹⁷¹ y Colombia y las movilizaciones y las resistencias contra la militarización, la represión y la criminalización de la protesta en México, Chile y Colombia en particular.¹⁷² Esta última problemática, en niveles menores y más focalizados, no deja de aparecer en forma alarmante en los países gobernados por fuerzas progresistas –véase, como lamentables botones de muestra, las denuncias de la CONAIE en Ecuador y la represión a la marcha del TIPNIS en Bolivia. En cuanto a los estudiantes -y la juventud en general-, salvo retroalimentar las experiencias de oposición reseñadas anteriormente, no están desplegando masivamente su potencial crítico y de movilización contestataria en contra de los gobiernos progresistas ni protagonizando movimientos específicamente centrados en cuestiones educativas.

Una primera ponderación de las líneas de conflicto y movilización social referidas en forma telegráfica en los párrafos anteriores lleva a no sobrevalorar la persistencia y la emergencia de ámbitos y dinámicas de conflictualidad siendo que no se puede ocultar que se trata, en gran medida, de manifestaciones que no rebasan, en la mayoría de los casos, el nivel económico corporativo y, en otros casos, la defensa de territorios. Es cierto que

¹⁷¹ La experiencia chilena es, sin duda, una demostración concreta, emblemática y esperanzadora de las posibilidades de impacto histórico de un cambio de generación que renueve y refresque las capacidades militantes y de mirada crítica respecto de sociedades envueltas por la hegemonía conservadora y un sentido común neoliberal.

¹⁷² Véanse al respecto, en esta misma edición del Anuario, los artículos de Sandra Vera sobre los estudiantes chilenos, J. López Pacheco sobre la represión en Colombia y Guiomar Rovira sobre la militarización en México.[Ed.]

en ambos casos se puede percibir, en forma explícita o latente, un mayor alcance y un cuestionamiento más profundo a un orden político-económico, sea el llamado neodesarrollismo o el capitalismo en general. También es cierto que toda acumulación de experiencias de lucha y de antagonismo tiene un valor en sí, sirve como antídoto a la reproducción de la subalternidad como condición funcional a la conservación del orden existente y conforma un piso que posibilita ulteriores y posteriores avances. Al mismo tiempo, los saldos positivos del 2011 en cuanto a la tendencia a la re-movilización parecen adolecer de un rasgo político fuerte, propio del antagonismo, y no estar acompañados de una re-politización antisistémica capaz de contagiarse socialmente y de impulsar una nueva oleada de protagonismo popular.

Confirma esta hipótesis, que marca claramente un límite político al interior de la tendencia a la re-movilización, el hecho de que la *oposición político-partidaria a la izquierda* de los gobiernos progresistas no parece prosperar. No han faltado en los últimos años re-agrupamientos y dinámicas de oposición izquierdista: el PPT en Venezuela, el PSTU en Brasil (aunque el PSOL tuvo un sorprendente declive después de un nacimiento prometedor), el FIT en Argentina y el MSM en Bolivia. En Uruguay esta dinámica parece mantenerse encerrada al interior de la coalición del Frente Amplio, pero es notable como el PCU manifiesta siempre mayores críticas hacia las orientaciones del gobierno y el peso de la corriente centrista (encabezada por Danilo Astori) en la toma de decisiones sobre política económica. También en Ecuador, por mencionar un proceso ocurrido en 2011, mostró cierta fuerza y dinamismo la Coordinadora Plurinacional (en la cual se juntan el partido indígena Pachakutik, el Movimiento Popular Democrático, la agrupación Montecristi Vive, encabezada por el ex presidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta, y el nuevo movimiento Participación (en torno a Gustavo Larrea, exministro del gobierno de Correa) y una fracción del partido socialista, la Corriente Socialista Revolucionaria.¹⁷³ Al mismo tiempo se trata de procesos y dinámicas que se mantienen, por el momento y considerando el año 2011, a un nivel testimonial y, por tanto, sin tener una capacidad expansiva que

¹⁷³ Señala Mario Unda en su informe anual que la Coordinadora “mantuvo acercamientos y acciones conjuntas con las principales organizaciones sociales, entre ellas la Conaie y la Unión Nacional de Educadores (UNE), blanco de permanentes denuestos por parte de Correa”.

permita imaginarlas como real contrapeso o como alternativa a las fuerzas que actualmente ocupan las instituciones gubernamentales y las mayorías de las instancias de representación parlamentaria.

En conclusión no hay conclusión, ya que el año 2011 se presenta como un eslabón de un proceso de transición en el cual no puede darse por terminada la tendencia a la des-movilización propia de la instalación de gobiernos progresistas en la medida en que la tendencia a la re-movilización aparece simplemente esbozada y no adquiere la persistencia, la densidad y la politicidad que permitiera hipotetizar un giro al interior de la época. Al mismo tiempo, y no es poca cosa, la conflictualidad no deja de estar coloreando los procesos políticos latinoamericanos y, en el terreno específico de lo ambiental, se van erigiendo año tras año trincheras que resultan indispensables –y en muchos casos demuestran una sorprendente eficacia- para resistir la ofensiva de despojo capitalista que amenaza vastos territorios latinoamericanos.